

Informe político de la Coordinadora de IUCA

Las luchas por el territorio y la defensa de los servicios públicos

Los pasados días 18 y 19 de mayo culminó nuestra asamblea federal. Como resultado de la misma se conformó una dirección amplia e integradora representativa del conjunto de federaciones en la que dos compañeros andaluces ocupan puestos de máxima responsabilidad en IU federal. El compañero Antonio Maillo como Coordinador federal y la compañera Eva García Sempere como responsable de Área Interna, organización y finanzas. El proceso asambleario ha sido ejemplar desde el punto de vista de la participación y del debate. El proceso post asambleario también lo ha sido por la capacidad de integrar en una sola dirección a las distintas candidaturas que participaron en el proceso previo.

Ahora toca cumplir los objetivos políticos que en esta asamblea nos hemos marcado y trabajar para que Izquierda Unida cumpla un papel protagonista en la necesaria recomposición e impulso del espacio de la izquierda transformadora en el país.

En el año 2025 tendrá lugar nuestro proceso asambleario, proceso que a buen seguro también será de amplio debate y participación.

Comenzamos curso político y corresponde establecer las prioridades políticas en las que el conjunto de la organización se debe implicar. Nuestras prioridades atienden a los malestares de la mayoría social, por eso centramos todo nuestro interés, energía y propuestas en resolver los problemas de la mayoría social que son consecuencia de políticas neoliberales aplicadas durante décadas e intensificadas por el gobierno antisocial de Moreno Bonilla en Andalucía.

En primer lugar, hemos de implicarnos en las luchas por el territorio que se extienden por Andalucía. Hay un mar de fondo de enorme indignación en las grandes ciudades y áreas metropolitanas por la pérdida del *derecho a la ciudad* provocado por la imposición de un modelo económico que genera precariedad, la falta de vivienda asequible, la gentrificación de los barrios y la mutación de los centros históricos en parques temáticos. Expresión de ese mar de fondo han sido las masivas movilizaciones de Málaga y Cádiz y la organización de vecinas y vecinos de los centros históricos de ciudades como Sevilla o Granada, que están haciendo propuestas para revertir esta situación y a las que sus ayuntamientos no están atendiendo. En estas manifestaciones se ha apelado a un conflicto en el que está en tela de juicio la insostenibilidad del modelo turístico y la ausencia de políticas

públicas que garanticen el acceso a la vivienda. Ahí es donde IUCA debe estar, junto a esas vecinas organizadas y así ser un referente político en la lucha por el derecho a la ciudad y el acceso a la vivienda.

Se ha impuesto una ley de la selva en el sector inmobiliario que está expulsando a las jóvenes generaciones de las ciudades y precarizando al conjunto de la clase trabajadora. Esta cuestión no solamente afecta a los centros de las ciudades, o a sus barrios con más atractivo turístico, también los barrios periféricos y las áreas metropolitanas ven incrementados sus precios ya que quienes vivían en los barrios saturados ya no pueden hacerlo y se produce un aumento de la demanda en dichas zonas. Por ello, esto no es solo un problema de unas pocas zonas concretas sino que afecta a amplias zonas con gran número de población.

Es por esto por lo que vamos a desplegar una campaña política de largo recorrido que sirva para organizarnos con colectivos y organizaciones, para movilizar a la ciudadanía y para impulsar políticas públicas en favor del acceso a la vivienda y de un cambio de modelo turístico.

Las dificultades para acceder a una vivienda están provocando que solo el 12.9% de la juventud andaluza se haya emancipado, la segunda peor tasa del país, y que las familias trabajadoras viven asfixiadas porque destinan gran parte de sus ingresos a pagar la hipoteca o el alquiler. Si bien estamos ante una problemática que afecta a todos los niveles de la administración, por tanto, no debemos dejar de presionar al Gobierno central para que impulse medidas urgentes y contundentes para paliar esta situación, debemos recordar que la mayor parte de las competencias las tienen las Comunidades Autónomas. Es fundamental presionar al gobierno andaluz para que ejerza sus competencias en materia de vivienda ante esta situación de emergencia.

Urge que el gobierno andaluz abandone su desobediencia a la ley de vivienda, que desarrolle un potente parque público de vivienda y que ponga coto a los pisos turísticos. En definitiva, el gobierno andaluz tiene que cumplir con la ley, ejercer sus competencias en materia de vivienda en favor de la gente y dejar de entregar el parque inmobiliario a los fondos de inversión.

También los ayuntamientos deben cumplir con su parte, no es casualidad que las organizaciones de vecinas y vecinos estén enfocando una gran parte de sus reivindicaciones hacía los ayuntamientos de las grandes ciudades en manos del PP. Los gobiernos municipales del Partido Popular se mueven entre mirar para otro lado sin tomar medidas o reconocer que hay un problema, pero anunciando tímidas medidas para lavarse la cara, por eso es fundamental la labor de las asambleas locales de IUCA y grupos institucionales de ayuntamientos y diputaciones. Debemos exigir a los Ayuntamientos andaluces que ejerzan sus competencias consagradas en el artículo 9.2 de la LAULA sobre planificación, programación y gestión de vivienda, elaborando Planes Municipales de Vivienda para exigir a la administración autonómica su participación financiado los mismos:

adquisición de suelo, construcción de vivienda social en régimen de alquiler o venta, facilitando con políticas activas el acceso a la vivienda como derecho universal que las administraciones tienen que asegurar

Este verano se han autorizado más macroproyectos de energías renovables en manos de fondos de inversión que atentan contra el patrimonio natural, se asientan sobre tierras fértiles y requieren enormes recursos hídricos. La transición energética en Andalucía no se está orientando a fomentar la soberanía energética mediante el despliegue de comunidades energéticas respetuosas con el patrimonio natural y con el sector agroganadero, y en manos públicas, sino que son el nuevo pelotazo de unos pocos grandes inversores. Se está aplicando un modelo extractivista que quebranta la posibilidad de soberanía energética y de soberanía alimentaria. Frente a ello se están dando movilizaciones de agricultores afectados por las expropiaciones, de ecologistas y de vecinos concienciados con el futuro de sus pueblos en muchos municipios.

Al igual que las manifestaciones de Málaga y Cádiz expresaban una reivindicación del derecho de sus vecinos a vivir en sus ciudades, a no ser *expropiados* de sus barrios, también en el mundo rural andaluz hay una lucha por el derecho al territorio, por la defensa de sus paisajes y de su agricultura. Desde IUCA apostamos por una transición energética justa que apueste por la soberanía energética y por la soberanía alimentaria: renovables sí, pero no así. Esta es también una lucha por el territorio ante la depredación de unos fondos de inversión a los que el gobierno andaluz les está poniendo en bandeja de plata el campo andaluz y entregando la producción de renovables en lugar de impulsar el control público y planificado.

El cambio climático y la sequía han llegado para quedarse. Con los embalses de la cuenca del Guadalquivir al 33%, un otoño seco puede tener efectos demoledores sobre sectores productivos como el agrícola, ganadero, turístico, etc.

Sin embargo, el gobierno andaluz sigue actuando como si nada pasara, profundización en sus políticas y proyectos esquilmadores del territorio y no dando respuesta con políticas valientes y ecológicas que hagan más resilientes a los sectores productivos ante una situación que se va a agravar.

El último ejemplo lo tenemos en la autorización de la reapertura de la mina de Aznalcóllar. En lugar de acometer una estrategia de dinamización económica en la zona con agricultura y reindustrialización verde para crear empleo y asentar a la población al territorio, el gobierno andaluz hace caso omiso a informes de expertos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada que alertan sobre los riesgos de la mina. El gobierno andaluz permitirá el vertido al río Guadalquivir de millones de metros cúbicos de aguas ácidas con la oposición, no solo del movimiento ecologista, sino también de otros colectivos sociales y del propio sector pesquero de Sanlúcar de Barrameda que ve amenazado su futuro.

Asimismo, no somos ajenos a la necesidad de abordar la salud ambiental como parte de la salud pública; casos como la expansión del virus del Nilo o las muertes por calor nos recuerdan que el cambio climático tiene ya un fuerte impacto en Andalucía. Por ello las políticas ambientales son urgentes en términos sanitarios. Sin obviar las medidas urgentes que habrán de tomarse en cada crisis, y de los necesarios planes de adaptación a los efectos más adversos del cambio climático, la lucha frente a la crisis ecológica requiere de planes de mitigación y freno del modelo depredador de recursos aplica el gobierno andaluz. En esta convicción sobre la necesidad de cuidar la salud ambiental y la salud pública nos volcaremos en el encuentro y acciones de protesta previstos contra la ampliación del cementerio nuclear de El Cabril.

La otra prioridad en la que hemos de centrar nuestra acción política y social es la defensa de los servicios públicos maltratados por las políticas neoliberales del gobierno andaluz. La acumulación por desposesión consiste en la mercantilización de aquellos servicios públicos que todavía no están en el mercado, por tanto, en laminar una de las políticas redistributivas que garantizan los derechos sociales y el bienestar y seguridad de la clase trabajadora andaluza.

La dependencia, la educación y la sanidad están padeciendo un deliberado deterioro en el sistema público y una constante externalización y privatización. La fórmula de colaboración público privada se ha convertido en un mecanismo idóneo para detraer recursos del sistema público, engordar las cuentas de empresas privadas y desmontar el estado del bienestar. Por ello, es prioritario continuar movilizándonos por la sanidad pública. El talón de Aquiles de la propaganda de Moreno Bonilla está en las listas de espera, en la inaccesibilidad a la atención primaria y en la fuga de sanitarios por la precariedad que se les impone.

El plan aplicado sin piedad a la sanidad pública se reproduce también con la educación. A pesar de que la bajada de la natalidad ofrece una oportunidad histórica para la bajada de la ratio en las aulas y que la JUNTA está recibiendo transferencias europeas y del gobierno central históricas el sistema educativo público ha comenzado el curso con enormes deficiencias. Desde que gobierna el Partido Popular en Andalucía se han cerrado más de dos mil aulas públicas mientras han aumentado los conciertos educativos, se han creado universidades privadas mientras se mantienen infrafinanciadas las universidades públicas andaluzas, se está dejando morir de inanición a la formación profesional pública mientras los fondos de inversión extienden sus centros privados y se maltrata a los profesionales del sistema público con un déficit de especialistas. Las consecuencias las pagan las familias trabajadoras obligadas a pedir préstamos para pagar la fp privada porque sus hijos e hijas se quedan sin plaza en la formación profesional pública, tienen que costearse las escuelas infantiles, les suben los precios de los comedores, tienen que pedir préstamos para cursar másters o sus hijos con necesidades especiales están desatendidos. La mercantilización de la educación en Andalucía es ya un hecho y con ello se está vulnerando el derecho a la educación.

Nuestra organización debe seguir siendo un referente feminista, por ello no podemos descuidar este frente. El feminismo sigue siendo uno de los elementos centrales del debate político y el antifeminismo uno de los arietes con los que más fuerza golpea la extrema derecha. Afortunadamente y gracias al trabajo del movimiento feminista en estos años muchas cuestiones han pasado a ser de sentido común, pero la derecha sigue atizando con esta cuestión y ya vemos que consiguen pequeños avances. Si no queremos perder esta batalla el feminismo debe seguir siendo un elemento principal.

Para ello estamos haciendo esfuerzos en convertir nuestra organización en una organización feminista internamente, ejemplo de ello es la aprobación en la pasada asamblea federal de la comisión de cuidados. Es un camino al que le queda un largo recorrido. Esto no debe impedir que sigamos atendiendo la política externa de esta cuestión. Andalucía fue la comunidad autónoma con más mujeres víctimas de violencia machista en 2023, 8.407, una tasa del 2'2, por encima de la media estatal que es de un 1,7 y 17 asesinadas. Este año no parece que las cifras vayan a mejorar. Mientras se dan estas cifras, el gobierno del PP ha recortado en recursos para la lucha contra la violencia machista y ha llegado a muchos acuerdos con la extrema derecha negacionista. Nuestro trabajo institucional debe fortalecerse en este ámbito.

Tenemos que resaltar las deficiencias existentes en administración de Justicia, lo que supone una merma en la prestación del servicio público donde se pueden ver señalamientos para reclamaciones de cantidad laborales para 2028, lo que supone un ejemplo de mala administración de justicia. Se debe reforzar los medios materiales existentes como aumento de los empleados públicos, creación de nuevos juzgados en materia de lo Social y Familiar y mejorar las condiciones de los operadores jurídicos como el servicio de orientación jurídica gratuita.

Uno de los ejes centrales sobre los que pivota la ofensiva de la extrema derecha es el racismo. La cuestión migratoria está en el centro de la conversación, pero no desde una perspectiva solidaria y basada en Derechos Humanos, el discurso busca la criminalización de las personas migrantes, llegando a atacar directamente a menores que han llegado solos a nuestro país.

Si se quieren controlar las migraciones lo que hay que hacer es controlar los flujos de capitales transnacionales, no levantar muros. Esto es lo que la derecha y la ultraderecha no quieren modificar: quieren que se pueda seguir expoliando a otros países sin asumir que eso conlleva la emigración de su población. No sobran migrantes en España, sobran fascistas. La derecha y la ultraderecha es cobarde y mentirosa porque señala a los más vulnerables e intenta dividir a la clase trabajadora para tapar que son las grandes empresas las que están expoliando a los países de origen las que nos están precarizando la vida.

La derecha y la ultraderecha consiguen generar miedo donde no existe un problema real. La llegada de migrantes es positiva para España, los datos lo demuestran, sin embargo la preocupación por esto va en aumento y el riesgo de encontrarnos con episodios racistas también. Para Andalucía esta cuestión es especialmente sensible, ya que es tierra de entrada a la UE, la falta de compromiso de las Comunidades Autónomas para el reparto solidario de los niños y niñas que llegan a nuestro país ha llevado a territorios como Canarias o Ceuta a una situación insostenible, y Andalucía podría verse en una situación similar, en la que se saturan los recursos existentes y no se garantizan los derechos humanos más básicos de los menores. Sin embargo, nos encontramos con un Gobierno andaluz, que miente sobre la financiación para cubrir estas cuestiones, ya que afirma que el Gobierno central no proporciona recursos cuando sí lo está haciendo, y que no fuerza al PP nacional a apoyar ese reparto solidario, que aliviaría a las regiones de llegada como Andalucía.

Como organización defensora de los derechos de las personas migrantes, no debemos dejar de lado esta cuestión en la batalla ideológica, no es casualidad que la extrema derecha azuce con este tema, y ganan la batalla cuando organizaciones de izquierda utilizan el mismo discurso, también el PSOE. Esta cuestión, junto al antifeminismo, son dos campos de batalla en los que se disputa la tan mencionada “batalla cultural” con la extrema derecha.

Valoramos muy positivamente el trabajo realizado por plataformas vecinales y organizaciones sociales de una ley de barrios vulnerables que debe llegar al Congreso. El proceso está siendo muy participativo y protagonizado por activistas y organizaciones en el conjunto de provincias de Andalucía. Una iniciativa que responde a los graves problemas estructurales que se dan en barrios vulnerables del conjunto del país y, muy especialmente, en Andalucía. Tengamos en cuenta que nuestra tierra alberga 12 de los 15 barrios más empobrecidos de España.

Por último, hay que seguir la aprobación de los convenios colectivos del sector como instrumento de negociación colectiva que supone una oportunidad para la subida salarial para las nuevas necesidades de vida e incorporar nuevos derechos laborales de conciliación social y familiar y reducción de jornada laboral. Debemos reforzar el papel de los sindicatos de clase en los procesos de negociación colectiva.

Un sistema de financiación autonómica para un nuevo país

Estas luchas en las que se ha de implicar la organización están en la base de la disputa por un nuevo país. En este sentido hemos marcado posición ante el debate en torno a la financiación autonómica suscitado por el acuerdo entre el PSC y ERC. Consideramos que la senda correcta de un modelo federal y plurinacional ha de ser la que mitigue los desequilibrios territoriales y las desigualdades sociales, es decir, que supere las brechas de nuestro país y que ayude a Andalucía a converger

económica y socialmente con el resto. Por ello, en el centro del debate tiene que estar la redistribución de la riqueza y, en consecuencia, la reforma fiscal imprescindible. Porque el objetivo ha de ser garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad. Nuestra propuesta entronca con el Acuerdo de 2018 del Parlamento Andalúz que apuntaba al reforzamiento de los servicios públicos y a la progresividad y justicia fiscal, por ello, consideramos que el debate de la financiación autonómica debe orientarse hacia dichos objetivos: equilibrio territorial y cohesión social. Para ello, entendemos fundamental establecer un suelo mínimo de inversión en sanidad, educación y dependencia que garantice una prestación de calidad a todo ciudadano y ciudadana, resida donde resida; la eliminación del dumping fiscal promovido por el Partido Popular donde gobierna porque aumenta el desequilibrio territorial, la desigualdad social y es injusto; la eliminación progresiva y condicionada de la deuda de las CCAA con el Estado; actualizar los mecanismos redistributivos que refuercen el principio de solidaridad; y afrontar una reforma fiscal que permita acometer las necesidades de las CCAA. Nos preocupa la concreción que pueda tener el pacto entre PSC y ERC y, del mismo modo, señalamos la hipocresía del Partido Popular. La derecha no tiene un modelo de país, tiene un modelo de negocio para unos pocos. Moreno Bonilla dice defender a Andalucía, pero defiende a una minoría privilegiada a la que le ha eliminado impuestos y a la que le está entregando el negocio de la educación, la sanidad y la dependencia a golpe de externalizaciones. Precisamente por eso, Moreno Bonilla y el Partido Popular azuzan contra el gobierno central y buscan la confrontación entre territorios, quieren ocultar que no tienen un modelo de país y que sus políticas son las que generan brechas sociales y territoriales.

Prueba de la hipocresía de Moreno Bonilla será la oposición de su partido a la propuesta de PGE. En lugar de contribuir a la llegada de inversiones a Andalucía y al despliegue de políticas sociales impulsadas por el gobierno de coalición se instalan en el “no” permanente, sin propuestas, ni sensibilidad con los malestares de la mayoría social andaluza. Andalucía necesita unos PGE que tengan como prioridad las políticas sociales que mitigan las desigualdades y que alivian la existencia de las capas populares en un contexto de precariedad, burbuja inmobiliaria y deterioro de los servicios públicos en Andalucía.

Alzar una alternativa para Andalucía

Este curso político será crucial para desalojar al Partido Popular del gobierno andalúz. Junto a la labor de oposición rigurosa hemos de ofrecer y confeccionar con la ciudadanía andaluza una alternativa programática sobre la que construir alianzas sociales y políticas, y que sea la bandera de una candidatura amplia para las próximas elecciones autonómicas. Por ello, en este curso político es importante que Por Andalucía despliegue un proceso participativo para elaborar un programa electoral y una candidatura ilusionante con capacidad de componer una mayoría progresista y de gobierno en Andalucía. Sin prisa, pero sin pausa, desde

IUCA nos vamos a entregar para que la gente sea partícipe de este proceso volcando sus propuestas y para que el tejido social andaluz se vea reflejado en el programa. Por Andalucía es una garantía de amplia confluencia de fuerzas políticas de izquierdas, andalucistas, ecologistas, feministas y pacifistas con capacidad de ensancharse y de sintonizar con la mayoría social que está llamada a quebrar la continuidad de la derecha en el gobierno andaluz.

Carretera y manta

Intensificar el diálogo directo con la militancia y el aumento de la afiliación es una prioridad política y organizativa de IUCA. Esta coordinadora andaluza va a planificar Encuentros con la Militancia en este trimestre para que las direcciones andaluza y provinciales escuchen y debatan con la militancia de base. Los encuentros, de ámbito comarcal y semipresenciales, deben servir para escuchar a la militancia, compartir diagnósticos y elaborar síntesis que ayuden a afrontar colectivamente los retos políticos contemplados en este informe con las vistas puestas en las elecciones municipales.